

La resistencia a los transgénicos y los movimientos sociales.

Rio Grande do Sul, Brasil

Silvia Ribeiro



Fuente: Biodiversidad, 21

«En una civilización que lucra con la muerte, es preciso defender la vida», afirma el texto de la sentencia que el Juez Antonio Souza Prudente dictó el 10 de agosto de este año, impidiendo por tercera vez, la liberación de la soja transgénica en Brasil.

La sentencia dictaminó a favor del recurso legal presentado por el Instituto Brasileiro de Defensa del Consumidor (IDEC) y Greenpeace, contra Monsanto, una de las multinacionales más grandes del mundo en transgénicos, actuando junto al Gobierno de Brasil que autorizó la liberación comercial en Brasil de la soja *Roundup Ready*—manipulada genéticamente para hacerla resistente al herbicida glifosato.

Aun cuando Monsanto apelara nuevamente, el proceso legal ya significó la pérdida de la siembra de 1999.

Una derrota política y económica altamente significativa para Monsanto y para los defensores de los transgénicos, ya que Brasil es el segundo productor mundial de soja y no solamente contaba con suculentas ganancias, sino además con la «debida» docilidad y cooperación que las multinacionales esperan de sus proveedores de materias primas, mano

de obra barata y sumideros de desechos tóxicos en el tercer mundo.

Y en verdad, Monsanto contó con esa cooperación en un alto grado, tanto de parte del gobierno brasileiro como de la CNTBio (la Comisión Nacional Técnica de Bioseguridad), órganos ambos que autorizaron la liberación comercial de la soja transgénica, pese a notorias irregularidades que fueron desde la inconstitucionalidad en los poderes otorgados a la CNTBio, hasta la ignorancia y contravención de los informes técnicos sectoriales de la propia CNTBio. Por ejemplo, el informe de una subcomisión técnico-asesora, es muy crítico y no aporta bases para el parecer final de la CNTBio en totalidad, que recomienda la liberación comercial de la soja RR. El Ministerio de Salud por su parte, también aportó su granito de arena para favorecer las ganancias de Monsanto, emitiendo un decreto contemporáneo por tres días a la aprobación de la soja RR en la CNTBio, a través del que intentó aumentar el nivel de residuos permitidos de glifosato en soja de 0,2 ppm a 20 ppm, es decir que sin mediar informe o cambio técnico alguno, aumentaba 100 veces el residuo per-

mitido del agrotóxico que le llegaría a los consumidores. Frente a las protestas de organizaciones de consumidores y ambientalistas, modificó en noviembre 1998 este decreto, dejando el residuo permitido en 2 ppm, o sea un pequeño aumento del 1000%.¹ Tests en Australia ya habían demostrado que los productos elaborados con soja RR contienen un nivel hasta 200 veces más alto de residuos de glifosato que la soja convencional, aun cuando ésta sea cultivada con químicos.²

En la misma tónica, Monsanto habría prometido al ex gobernador de Bahía Antonio Carlos Magalhaes (actualmente presidente de la cámara de senadores) la instalación por valor de 500 millones de dólares de una fábrica de su rentable herbicida *RoundupReady* en dicho estado, uno de los más pobres y «baratos» de Brasil. No conocemos que otros ofrecimientos más personales pueden haber mediado, pero es como mínimo curioso que se pueda considerar un beneficio la venta a precio de ganga de la salud de la gente y del ambiente, para la instalación de una gigantesca fábrica de veneno.

Sin embargo y pese a la magnitud económica y política de las fuerzas proponentes de la liberación inmediata de los transgénicos, el juez Souza Prudente, haciendo una revisión cuidadosa de elementos, riesgos sociales, económicos y ambientales de los transgénicos en suelo brasileiro, decide fallar a favor del principio de precaución, obligando a la empresa a un estudio de impacto ambiental previo y a esperar el establecimiento de normativas más rigurosas de bioseguridad y etiquetado de este tipo de productos. Agrega además, contestando a los argumentos presentados por el gobierno federal sobre los controles que prometen: «que no se ha de olvidar, aquí, la insuficiencia de los mecanismos de los controles oficiales para lograr la eficacia plena de esa respetable decisión. En mis quince años de magistratura federal y más de treinta de vida forense, puedo testimoniar, por donde pasé ejerciendo jurisdicción —Acre, Rondônia y Pará— [...] la más bárbara degradación ambiental de nuestros ríos, flora y fauna, frente a la impotencia y la irresponsabilidad de los órganos gubernamentales. La Amazonía es sin duda, un continente de ecosistemas, entregado, lamentablemente, a la ganancia del capitalismo salvaje, que sólo visualiza el lucro y la barbarie de la especie humana, bajo la consigna de este fin de siglo antevista por Tomas Barreto: *Serpens qui*

serpentem non comederit, non fit Dracon (la serpiente que no devora la serpiente no se hace Dragón).

Antes que sean todos devorados por la *insania del siglo*, urge adoptar medidas de precaución».³

Otro detalle curioso de este proceso fue que en la segunda instancia de apelación, Greenpeace e IDEC acusan al Ministerio de Medio Ambiente (IBAMA) de no cumplir con el mandato constitucional de realizar un estudio de impacto de emprendimientos que suponen riesgos. IBAMA, la secretaria competente en el tema, contesta que dicho estudio nunca le fue solicitado por el gobierno, y *se suma* a Greenpeace e IDEC en la demanda contra el gobierno federal y Monsanto.

¿CLONAMOS AL JUEZ?

Si bien esta sentencia es histórica, y cabe reconocer al juez implicado, así como a los anteriores que fallaron a favor de los recursos legales en las primeras instancias, no se trata en nuestra opinión de personas extraordinarias que deberían ser clonadas para poder resistir el avance de los transgénicos en nuestros países. Se trata más bien de una concienzudo trabajo de base y en múltiples niveles, del que esta sentencia es producto y una más de sus manifestaciones.

La resistencia popular a los transgénicos en países como Inglaterra, la destrucción de campos transgénicos realizada por campesinos en Francia e India, las evidencias y declaraciones científicas o políticas de esos y otros países, ha sido también una fuente de ánimo e inspiración que se sumó al haz de los movimientos brasileiros. Hay que destacar que Brasil es un país exportador de soja. No hay pues sospecha de proteccionismo disfrazado de ecologismo.

Reconociendo el valioso trabajo a nivel nacional en Brasil de organizaciones como IDEC y Greenpeace⁴ o de activistas de larga data como David Hathaway —asesor de la organiza-

¹ Decreto (portaria) del 20/11/98 del Ministerio de Saúde.

² Bio Test, Australia, Octubre de 1998.

³ La cursiva es del original. Cita del texto de la sentencia. Para ver todo el texto de la sentencia y referencias de la acción legal: <http://www.uol.com.br/IDEC> y <http://www.greenpeace.com.br>.

⁴ Ver en las direcciones de Internet citados.

ción AS-PTA— y de activistas regionales en varios otros estados brasileños, quisiéramos compartir aquí particularmente algunos elementos del proceso en el sur de Brasil, por la complejidad y riqueza de elementos allí presentes.

RIO GRANDE DO SUL: UNA LLAMA QUE MUESTRA EL CAMINO

El sur de Brasil tiene una historia rebelde: los gauchos, como se les llama a los habitantes de Río Grande do Sul (RS), han estado un paso adelante en la resistencia a modelos de sociedad injustos y abusivos con la gente y el ambiente. Además de ser pioneros en el ecologismo brasileño, también el Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra, el Movimiento de Mujeres Trabajadoras Rurales y parte importante del sindicalismo nuevo de base y de sus sindicatos más participativos, democráticos y combativos tienen raíces importantes en esta región. Conociendo estos antecedentes, no asombra que también en este tema se manifestaran tempranamente.

Ecologistas y agricultores

Así pues, el movimiento ambientalista brasileño tiene buena parte de sus orígenes aquí, con reconocidos pioneros como Magda Renner (Amigos de la Tierra Brasil), José Lutzemberger (Fundación Gaia), Flavio Lewgoy (AGAPAN) y otros. Desde hace años, estos venían trabajando en una fuerte oposición, por ejemplo, a las patentes sobre la vida.

El movimiento de resistencia al paquete tecnológico de la revolución verde, y al uso de agrotóxicos contó además con figuras como Jacques Saldanha, Sebastião Pinheiro, Maria José Guazzelli, que antes que en ningún otro estado, lograron el establecimiento en Río Grande do Sul de una Ley de Agrotóxicos mucho más restrictiva que en el resto del país.

Particularmente los últimos nombrados, han generado además de fuertes corrientes de opinión, importantes hechos sociales. Pinheiro es una de las figuras más importantes en el acercamiento y diálogo entre el ecologismo y los movimientos sociales. Desde hace años, además de su permanente y polémica actividad de denuncia e información, se ha dedicado a com-

partir su experiencia y conocimientos en múltiples talleres y conferencias con sindicatos, movimientos de trabajadores rurales, el movimiento de los «sin tierra», las mujeres trabajadoras rurales y otros.

María José Guazzelli, trabaja desde hace más de 15 años junto a otras personas, en una organización actualmente llamada Centro Ecológico, en entrenamiento de pequeños productores en agricultura ecológica y biodiversidad agrícola. El trabajo de Centro Ecológico, sobre todo en las zonas de Ipê y Antonio Prado, ha apoyado con éxito la formación de varias organizaciones de productores ecológicos que actualmente son un ejemplo de autogestión económica, técnica y social, y cuyas actividades van mucho más allá de la agricultura como actividad productiva. Posiblemente están logrando la recuperación de una verdadera «cultura» del campo, un nuevo paradigma no sólo técnico sino también social y cultural que se manifiesta en la riqueza de pensamiento de los y las integrantes de las asociaciones formadas.

Por ejemplo, estas asociaciones —así como el Centro Ecológico— han defendido que la certificación de productos ecológicos debe ser realizada por los propios productores, a partir del control grupal, del orgullo de la producción sana, la posición ética de los productores junto a los consumidores y por ser ellos mismos también consumidores. No es una simple posición técnica, es toda una reivindicación político-filosófica sobre la tecnocracia y quién tiene derecho a «certificar» nuestro trabajo e ideas.

Esto, en medio de tendencias agrícolas arrolladoramente excluyentes del pequeño productor y del trabajador y trabajadora rural. Estas experiencias han sido una referencia obligada para el movimiento de la agricultura ecológica también en los países vecinos, así como la existencia de la cooperativa autogestionada de productores y consumidores ecologistas «Colméia». Esta cooperativa, La Colmena, además de aportar la viabilidad económica de los agricultores ecologistas y el contacto más directo entre consumidores y productores, ha producido varios materiales de información tanto sobre agrotóxicos como sobre transgénicos. La extensa feria callejera que se realiza dos veces por semana en el centro de Porto Alegre, capital del estado de RS, es un punto de referencia importante para muchos ciudadanos.

BIODIVERSIDAD Y SEMILLAS LOCALES

No es extraño con estos antecedentes, que a partir de organizaciones como la AECIA (Asociación de agricultores ecologistas de Ipê y Antonio Prado) surgiera el tema del rescate de variedades locales de semillas por los propios agricultores y, concomitantemente, la oposición a los transgénicos, consolidando a mediados de este año a esos municipios como «Municipios libres de transgénicos», junto al municipio de Espumoso que ya antes se había declarado en el mismo sentido.

CAPA (Centro de Apoyo al Pequeño Productor) y CETAP (Centro de Tecnologías Alternativas Populares) con trabajos similares, formaron junto con Centro Ecológico una coordinación que cubre varias zonas del estado de RS (que tiene diez millones de habitantes y cerca de 442.000 km²) para trabajar conjuntamente en la difusión y elaboración de materiales y talleres sobre transgénicos, sus impactos y formas alternativas concretas para resistir su advenimiento, la importancia y formas experiencias concretas de fomento de la biodiversidad agrícola, dedicándose al trabajo de base en el medio rural.

Otra vertiente de particular importancia es el aporte de personas como Angela Cordeiro, que desde hace muchos años, a través de ONG, viene investigando y trabajando con agricultores en el rescate de variedades locales de maíz y frijol, en la formación de bancos comunitarios de semillas y en capacitación en biodiversidad. Angela fue contactada por la Secretaría de Agricultura de RS al inicio de la nueva gestión de gobierno, para asesorar en la formación del personal de extensión agrícola en el tema transgénicos, realizando una importante labor de difusión entre éstos y entre muchas organizaciones no gubernamentales.

LOS «SIN TIERRA»

El Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra, o MST, es sin lugar a dudas el movimiento social más importante en Brasil. Fuertemente organizados, con un práctica de acción directa —las ocupaciones de tierras improductivas— con más de un millón de miembros en todo Brasil, de los cuales más de cien mil familias están en los asentamientos de la reforma agraria (es decir ocupaciones reconocidas y regularizadas por el

gobierno), son una fuerza social imposible de ignorar.

La claridad de análisis sobre la coyuntura económica brasilera y su contexto internacional, así como la energía de acción de resistencia y de redistribución de recursos, no ha sido siempre acompañada de planteos igualmente claros en los aspectos tecnológicos y ambientales. Siendo un movimiento vivo y masivo, cohabitan en el MST propuestas de utilización de sofisticadas tecnologías agrícolas, más bien propias de la matriz tecnológica que excluyó la mano de obra del campo, con planteos de agroindustrias locales y agricultura ecológica, además de un proyecto de producción de semillas locales agroecológicas, único en Brasil y quizá en toda América Latina.

Pero, la posición del MST en el tema de transgénicos ha sido clara y pública: en enero de 1999, el Movimiento tomó posición oficial como tal y expresó su claro rechazo a esta tecnología, por sus consecuencias tanto ambientales como sociales de sojuzgamiento y mayor dependencia de los productores. Frei Sergio, uno de los líderes históricos del Movimiento, actual Subsecretario de la Reforma Agraria del Estado de Rio Grande do Sul expresó esta posición dentro y fuera de las estructuras del gobierno local de Rio Grande do Sul.

En marzo de 1999, el MST anunció su intención de destruir los cultivos transgénicos ilegales. La ilegalidad se refería al decreto que realizó el gobierno local del estado de RS en ese mismo mes, por el cual no se permitiría ningún cultivo transgénico, ni siquiera con fines experimentales, sin presentar un estudio previo de impacto ambiental. En ese mismo mes, el MST destruyó el campo de un asentado en Rondinha, al cual se le había vendido soja transgénica de contrabando —una estrategia de Monsanto para crear situaciones de facto. Se discutió la situación en el asentamiento y se decidió quemar el campo, compensando al productor por sus pérdidas.

La COCEARGS (Cooperativa Central de Asentados de Rio Grande do Sul), organismo creado por el MST para favorecer la colaboración entre las cooperativas de asentados, ha jugado un papel importante en la información hacia el propio Movimiento y en la participación en los seminarios regionales donde se debatió el tema transgénicos. Una de estas cooperativas —COOPERAL— ha comenzado además la producción sistematizada y la comercialización de semillas agroecológicas de variedades locales bajo la marca «Bionatur», coordinando

varios productores y creando un precedente y un modelo concreto alternativo a las propuestas de uso de variedades híbridas y transgénicas de las multinacionales.⁵

Los sindicatos

Sin lugar a dudas una de las organizaciones pioneras en el tema transgénicos en RS, fue la CONTAC —Confederación de trabajadores de las industrias de alimentación, agroindustrias, cooperativas de procesamiento de cereales e industrias del medio rural—, pertenecientes a la CUT (Central Única de Trabajadores) que organizó el primer seminario público de relevancia sobre transgénicos, con cerca de 800 participantes ya en marzo de 1998. Tenía actividades de información desde 1996. La CONTAC tiene 600.000 miembros afiliados y es la única confederación que elige a sus dirigentes por elecciones directas de los miembros (y no por votos regionales). Su presidente, Siderlei Silva de Oliveira, un militante activo y pionero en la lucha contra transgénicos, cuenta que su actividad en el tema fue una consecuencia lógica de una de sus principales preocupaciones desde el comienzo de su trabajo como asalariado de la industria alimentaria: la calidad de los alimentos y la responsabilidad y orgullo de los trabajadores de controlar lo que producen y ponerle límites al afán inescrupuloso de lucro de las empresas, que no dudan en empeorar los alimentos si eso les da ganancias. El producto de su trabajo, dice Siderlei, es la comida de sus hijos e hijas, el resto de la sociedad y por supuesto de sí mismos. Siderlei impulsó esta discusión fuera y dentro de la confederación, produciendo materiales e información, acercando a la CONTAC a asesores como Sebastião Pinheiro con el cual recorrieron casi todo el estado y muchas otras partes de Brasil informando sobre los impactos ambientales, sociales y económicos de los transgénicos.

También el Departamento Rural de la CUT tomó posición contra los transgénicos, incorporando el tema a uno de sus proyectos educativos de base más extensos, titulado «Terra Solidaria». Múltiples sindicatos de base de los trabajadores rurales están realizando actividades educativas. Posteriormente,

también la FETAG, Federación de Trabajadores de la Agricultura se posicionó críticamente a los transgénicos.

...y el resto también!

Como un reguero de pólvora, encendido por las organizaciones anteriormente citadas, muchas entidades significativas de la sociedad riograndense tomaron posición pública contra transgénicos en 1999. Entre ellos la prestigiosa OAB, Ordem Brasileira de Advogados, que a través de su Comisión Especial de Ecología en RS, se pronunció públicamente, señalando los peligros por la falta de normativas de bioseguridad y las decisiones antiéticas y anticonstitucionales de la CNTBio y el gobierno federal en el tema. En sentidos similares se pronunciaron el Movimiento de los Amas de Casa, la Comisión Pastoral de la Tierra, las Mujeres Trabajadoras Rurales y otros.

Posiblemente, la manifestación más clara de este movimiento tomó forma en un seminario público que se realizó el 20 de agosto, con unos 2500 participantes de todo el estado, y que elaboró la «Carta de Río Grande do Sul sobre transgénicos», que anexamos y que describe los puntos básicos comunes de la campaña. Este seminario fue la culminación de una serie de seminarios regionales en el interior del estado, que movilizó más de 10.000 personas desde inicios del año, en seminarios de uno o más días, donde se plantearon debates públicos entre proponentes y críticos de los transgénicos, desde el punto de vista científico, de los consumidores, de los productores y de los ambientalistas.

POSICIÓN OFICIAL: ZONA LIBRE DE TRANSGÉNICOS

En octubre de 1998, fue electo Olivio Dutra, del Partido de los Trabajadores (PT) como gobernador del Estado de Río Grande do Sul. A partir del 1 de enero de 1999, la nueva administración tomó rápidamente varias medidas que, aunque anunciadas en la campaña electoral, fueron sorpresivas para muchos, porque pocos pensaban que se irían a cumplir. Entre ellas, el corte de las subvenciones escandalosas —centenares de millones de dólares— que el estado de RS pasaba a las multinacionales de la industria automovilística. Esto provocó la reti-

⁵ Por más información, dirigirse a bionatur@alternet.com.br

rada de la Ford, lamentablemente hacia otro estado de Brasil que está dispuesto a subvencionarla en lugar de dedicar esos fondos públicos a resolver los problemas urgentes de la población. Casualmente la fábrica Ford se fue al estado de Bahía, de Antonio Carlos Magalhaes, el mismo estado que recibiría la fábrica de agrotóxicos de Monsanto.

En el tema transgénicos, el nuevo gobierno hizo uso de su derecho constitucional de decidir en temas de medio ambiente e interpuso un decreto que declaró ilegales todos los cultivos transgénicos del estado que no contaran con estudio ambiental previo. Y esto no quedó sólo en palabras: a través de la Secretaría de Agricultura, notificó y destruyó o clausuró todos los campos experimentales de cultivos transgénicos, comenzando por el IRGA (Instituto Riograndense del Arroz), que es un instituto público del propio estado que estaba experimentando con arroz transgénico. La argumentación de gobierno se refiere en parte a la falta de estudios conclusivos que eliminen los riesgos ambientales sobre suelos brasileiros de los cultivos transgénicos, y fundamentalmente de aquellos cultivos que —sin tomar nota de que son «experimentales»— se cruzan libremente en el ambiente, transmitiendo sus características transgénicas a las llamadas malezas o a parientes silvestres y criollos.

El gobierno local argumenta también en función de la pérdida de soberanía que significa la introducción de transgénicos debido al manejo de una tecnología altamente sofisticada y patentada, y al alto nivel de concentración en manos de unas pocas empresas multinacionales que en los últimos años han comprado la mayoría de las semilleras brasileiras y varias distribuidoras.

Luego del decreto, la secretaría de agricultura llamó a las organizaciones de la sociedad a debatir el tema en seminarios públicos —desafío que fue tomado por varias organizaciones, con los resultados descritos.

Al mismo tiempo, organizó dentro de EMATER (el órgano de extensión agrícola público, o sea los agrónomos y técnicos que trabajan asesorando a los productores) una serie de seminarios y talleres de educación sobre el tema.⁶

A nivel legislativo, el diputado del PT Elvino Bohn-Gass presentó un proyecto de ley que aún se está discutiendo, para convertir Rio Grande de Sul en una zona libre de transgénicos en forma permanente.

ALGUNAS REFLEXIONES SOBRE ESTE PROCESO

En una encuesta realizada en julio de 1999, a la pregunta si sabían que son los transgénicos, la población de Rio Grande do Sul contestó que sí sabía en un 66%, mientras que en estados como Brasilia y São Paulo, esa respuesta varió entre 12-17%. El trabajo de gran capilaridad de las organizaciones sociales, y sobre todo la conjugación de factores que van desde la denuncia de impactos y el reclamo de los derechos de los ciudadanos a la proposición de alternativas, ha sido posiblemente el elemento fundamental para este resultado y para lograr el nivel de información y actividad de este estado en particular, que ha tenido repercusiones que han desbordado sus fronteras locales y nacionales.

Por supuesto, la colaboración entre diferentes movimientos —que no ha sido obvia ni exenta de dificultades— es un elemento importante, así como el apoyo oficial, poco frecuente y que es producto de este trabajo social. Y el hecho de que en el imaginario de la gente esté viva la posibilidad de que el mundo no tiene por qué ser como es y que nos podemos organizar y lograr resultados que cambien nuestra vida cotidiana.

Frente a las fuerzas que los amenazan, no es nada seguro que las victorias logradas sean permanentes. Por eso, la única garantía será el nivel de información y resistencia que puedan hacer los agricultores y consumidores, negándose a usar y consumir productos transgénicos, pero también conservando sus propias semillas y variedades locales adaptadas al clima y suelo. Y trabajar para conformar culturas locales de consumidores que promueva esta diversidad de cultivos en los agricultores, liberándose de la dependencia de químicos e insumos externos y fomentando además la seguridad alimentaria local. Ésta es la propuesta de COOPERAL del MST, y de los agricultores y consumidores ecologistas y las organizaciones que los apoyan. No se puede decir que esperamos que se realice: en Rio Grande do Sul no se espera, se construye.

⁶ Ver el sitio en internet de EMATER: www.emater.tche.br.